Bogotá, Agosto de 2023

Señores,

**Mesa Directiva**

Cámara de Representantes

Ciudad.

**Asunto:**  Proyecto de Ley No. \_\_\_\_\_ de 2023 Cámara ***“Por medio de la cual se establecen lineamientos estratégicos de política pública para la ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos rurales y se dictan otras disposiciones”***

Respetados Señores,

En mi calidad de Senadora de la República y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la Constitución y la Ley, me permito respetuosamente radicar el Proyecto de Ley *“****Por medio de la cual se establecen lineamientos estratégicos de política pública para la ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos rurales y se dictan otras disposiciones”***. Por lo tanto, lo presentó a consideración del Congreso de la República para iniciar el trámite correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas por la Constitución y la Ley.

De los Honorables Congresistas,

| **ANA CAROLINA ESPITIA**  Senadora de la República |  |
| --- | --- |
| **JUAN DIEGO MUÑOZ CABRERA**  **Representante a la Cámara**  **Partido Alianza Verde** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ JUAN CAMILO LONDOÑO BARRERA** Representante a la Cámara por Antioquia Partido Alianza Verde |
| **JOTA PE HERNÁNDEZ.** Jonathan Pulido Hernández.  **Senador de la República.**  Partido Alianza Verde. | **CAROLINA GIRALDO BOTERO**  Representante a la Cámara por Risaralda  Partido Alianza Verde |
| **JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES** Representante a la Cámara por Boyacá  Partido Alianza Verde |  |

**PROYECTO DE LEY \_\_\_\_\_ DE 2023 CÁMARA.**

*“Por medio de la cual se establecen lineamientos estratégicos de política pública para la ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos rurales y se dictan otras disposiciones”*

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

**TÍTULO I. OBJETO Y DISPOSICIONES GENERALES.**

**Artículo 1. Objeto.** La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos estratégicos para una política pública de garantía y ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos rurales para que los ciudadanos colombianos que residen en territorios rurales vivan en condiciones dignas y así aumentar la productividad y competitividad, para que Colombia se convierta en Despensa Agrícola Mundial.

**Artículo 2. Definiciones.** Para efectos de la presente ley aplican las siguientes definiciones:

**Política Pública de Servicios Públicos Rurales:** Proceso intersectorial de decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos de planeación, con el fin de generar condiciones dignas de vida para la población campesina. El Gobierno Nacional tiene la obligación de desarrollar programas y proyectos de corto y mediano plazo coordinados con diferentes instituciones para encaminarse en la visión de ruralidad que reconozca la diversidad de las áreas rurales y los vínculos urbano-rurales.

**Bienes y Servicios Públicos Rurales:** Conjunto de bienes y servicios sociales vinculados a la garantía de los derechos con los que deben contar los pobladores de la zona rural para vivir dignamente y potenciar su capacidad y vocación agrícola. Estos bienes y servicios incluyen: educación, salud, agua potable, saneamiento básico, electricidad, gas, telefonía, transporte y vías, la conectividad digital, acceso a infraestructura fiable, asistencia técnica agropecuaria, vivienda, nutrición, protección a la primera infancia, entre otros.

**Ciencia, Tecnología e Innovación del Campo:** Conjunto de apoyos por parte de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que permitan la innovación, la extensión, la capacitación, la transferencia tecnológica, el suministro de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades agrícolas, la utilización de nuevas técnicas agrícolas, la modernización del campo y la implementación de diferentes dispositivos que potencialicen y aumenten la producción.

**TITULO II. POLÍTICA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS RURALES.**

**Artículo 3. Objetivo de la Política Pública de Bienes y Servicios Públicos Rurales.** La política pública tiene como objetivo generar una serie de mecanismos y herramientas a través de acciones y programas gubernamentales que garanticen y amplíen la cobertura de bienes y servicios públicos para el sector rural y que sirvan de catalizador para aumentar la producción y la utilización responsable, segura y eficiente de la tierra con vocación agrícola.

**Artículo 4. Política Pública de Bienes y Servicios Públicos Rurales.** El Gobierno Nacional en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la sanción de esta ley, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con los demás Ministerios, Entidades Territoriales y de manera participativa con la población campesina, diseñará, expedirá y ejecutará esta Política Pública con base a los parámetros y lineamientos establecidos en la presente ley.

**Artículo 5. Lineamientos para la Política Pública de Bienes y Servicios Públicos Rurales.** Para el diseño, expedición y ejecución de esta Política Pública de Bienes y Servicios Públicos Rurales se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

* Propiciar una democratización del acceso y la propiedad sobre la tierra.
* Enfoque territorial, intersectorial, poblacional y de respeto por los derechos de los ciudadanos en todo el proceso de conformación y aplicación de la política pública.
* Esta política deberá ser formulada en consonancia con los artículos 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia y lo concertado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, particularmente, los principios de la reforma rural integral y las medidas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (Punto 1.2) y Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (Punto 1.3)
* Los principios de solidaridad, dignidad, no discriminación y paz.
* Universalidad, indivisibilidad, interrelación e interdependencia de los derechos humanos.
* Revalorización de lo rural.
* Utilización de tierras con vocación agrícola que no han sido sembradas.
* Desarrollo rural y la conservación y protección del medio ambiente.
* La coordinación y articulación vertical y horizontal entre diferentes niveles de gobierno y políticas públicas.
* Garantías y condiciones dignas para atraer y retener población en la zona rural.
* Creación, impulso y fortalecimiento de las organizaciones y gobiernos rurales o la creación de capital comunitario.
* Búsqueda de Seguridad Alimentaria a través de medidas que se fundamenten y generen soberanía alimentaria en todo el país.
* Autonomía y participación de los actores del sector rural en el planteamiento, diseño y ejecución de planes y programas de bienes y servicios públicos rurales.
* Tecnificación del campo, procesos de innovación, desarrollo tecnológico, transmisión y acumulación de conocimiento por medio de la extensión agropecuaria.
* Conectividad vial y digital.
* Comercialización agropecuaria.
* Priorizar la vinculación de niños y niñas, jóvenes, mujeres, personas de edad, y personas con discapacidad.
* Gestión eficiente de los recursos hídricos.
* Diagnóstico e interpretación de la sociedad rural.
* Estímulos a la economía agro-empresarial y de solidaridad asociativa.
* Priorizar la financiación de programas de bienes y servicios públicos rurales.
* Sustentarse en la eficiencia económica y en las nuevas herramientas para la ruralidad buscando innovación agropecuaria.
* Incorporar a la población que se encuentre dentro del marco de los acuerdos de paz, generando que el campo sea la alternativa segura para las víctimas y quienes decidieron dejar las armas.
* Capacitación y formación pertinente y actualizada para los pobladores rurales.
* Implementación de prácticas agroecológicas, a través de la articulación entre la diversidad y sinergía de sistemas agroecológicos, la mayor eficiencia en el uso de recursos, la creación conjunta y el intercambio de conocimientos, la cultura y las tradiciones alimentarias y agrícolas, la economía circular, y la gobernanza responsable.
* Mitigación de los impactos del cambio climático.

**TITULO III. ACTUALIZACIÓN DEL PECTIA.**

**Artículo 6.** El Gobierno Nacional tendrá en cuenta e integrará los lineamientos expuestos en el artículo 5 de la presente ley para la actualización del **Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA)** para que dentro de esta herramienta de planificación en materia de ciencia, tecnología e innovación sectorial se tengan en cuenta las nuevas dinámicas del campo colombiano y se elaboré un Plan Estratégico inclusivo que se centre en fortalecer el sector primario colombiano como eje de la economía del país.

**TÍTULO IV. BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS RURALES**

**Artículo 7. Bienes y servicios públicos rurales.** Partiendo de la definición establecida en el artículo 2 de la presente ley, serán Bienes y Servicios Públicos en el campo colombiano teniendo en cuenta las necesidades y el contexto de la ruralidad los siguientes:

* **Educación:** garantía de las facetas de disponibilidad, acceso, adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación en todos los tipos de formación y educación.
* **Salud de calidad:** los pobladores rurales en el marco de la garantía del derecho a la salud, tendrán acceso a servicios que garanticen el más alto nivel de salud física y mental, sin que se presenten brechas en el acceso, uso y calidad del servicio de salud. Igualmente, implica la disponibilidad de información y servicios en derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, los campesinos y trabajadores de zonas rurales tienen derecho a no utilizar sustancias peligrosas, productos químicos tóxicos o agrotóxicos.
* **Saneamiento Básico:** acceso de los habitantes rurales a instalaciones de saneamiento básico adecuadas, seguras, higiénicas, no discriminatorias y dignas.
* **Agua potable:** satisfacción del servicio de agua a través del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, disponibilidad y calidad.
* **Acceso a Energía Eléctrica:** la disponibilidad de infraestructura adecuada y en condiciones de equidad para el suministro y cobertura total del servicio público de energía eléctrica. Este bien y servicio público esencial incluye el acceso universal a soluciones sostenibles de energía.
* **Tecnologías de la información y la comunicación:** provisión de estrategias e infraestructura para el acceso y cobertura total de servicios de internet y telefonía celular de calidad.
* **Transporte e infraestructura vial:** disponibilidad de infraestructura y de medios de transporte adecuados y seguros para garantizar la libre circulación de habitantes rurales.
* **Vivienda:** acceso a la seguridad jurídica de la tenencia y a infraestructura adecuada para la expresión de la identidad cultural y con disponibilidad de servicios y condiciones dignas de habitabilidad.
* **Alimentación nutritiva:** acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos para el adecuado desarrollo físico y mental de la población rural.
* **Ciencia y tecnificación:** acceso, promoción y disponibilidad de conocimiento científico sobre el contexto rural y de asistencia técnica y tecnológica integral.
* **Mecanización agrícola sostenible:** acceso a herramientas agrícolas modernas, sostenibles, eficientes, efectivas y adaptadas a las necesidades culturales.
* **Cultura, Deporte y Recreación:** disponibilidad, accesibilidad,aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad de la provisión de servicios de deporte, cultura y recreación.
* **Atención a los impactos del cambio climático**: acceso a recursos e infraestructura para abordar las consecuencias del cambio climático y garantizar la resiliencia de las comunidades rurales.

**Artículo 8. Provisión de bienes y servicios públicos rurales.** El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o el Ministerio que haga sus veces, por medio de la coordinación interministerial e institucional a nivel nacional y territorial, en un plazo no mayor a un (1) año desde la promulgación de la presente ley, creará y ejecutará un proyecto de provisión de bienes y servicios públicos para las zonas rurales, teniendo por meta lograr que en un plazo de 10 años, se logré abastecer de servicios públicos al 85% de la ruralidad colombiana.

**Parágrafo 1:** El Ministerio de Hacienda y las demás entidades pertinentes rendirán informes anuales ante el Congreso de la República y ante la Presidencia de la República, mostrando los avances en la ampliación de la cobertura de los servicios públicos en zonas rurales.

**Parágrafo 2:** Para la ejecución del proyecto, se priorizarán las Zonas Rurales más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), buscando que en estas zonas rurales de posconflicto se den las condiciones para que las personas desmovilizadas puedan ver en el campo y en el agro una alternativa segura y digna para vivir.

**TÍTULO V. AMPLIACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS RURALES DESDE LAS INSTITUCIONES.**

**Artículo 9. Inclusión del enfoque de Bienes y Servicios Rurales en las instituciones estatales.** Todos los niveles de gobierno en la formulación coordinada y articulada de políticas públicas deberán tener en cuenta las circunstancias y particularidades rurales para garantizar la satisfacción de los bienes y servicios públicos rurales.

**Artículo 10. Priorización de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)**. Los departamentos y municipios, en el marco de su autonomía administrativa, priorizarán recursos del SGP en inversiones en zonas rurales para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos rurales, con el propósito de corregir el sesgo de inversiones a favor de las cabeceras municipales.

**Artículo 11.** Modifíquese el artículo 2 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así:

ARTíCULO 2° Créase el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades dirigidas a la materialización de la reforma agraria y la reforma rural integral, desarrollando los mandatos y salvaguardas contenidas en el acuerdo de Paz, con el fin de mejorar la calidad de vida, garantizar los derechos territoriales y los planes de vida de los trabajadores agrarios, y las personas, comunidades campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Ios pueblos indigenas; y proteger y promover la producción de alimentos, sus economías propias y consolidar la paz con enfoque territorial.

El Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, estará conformado por los subsistemas que se describen en el artículo siguiente y por las entidades cuya misionalidad está relacionada con el desarrollo rural y representantes de las comunidades campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblos indígenas, quienes deberán obrar con arreglo a las políticas gubernamentales, los principios que rigen el régimen agrario y los mandatos constitucionales en la materia.

Parágrafo 1. El Gobierno reglamentará la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, **en un plazo no mayor a un (1) año desde la promulgación de la presente ley,** garantizando la participación activa de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras campesinas y la consulta previa libre e informada cuando proceda.

**Parágrafo 2. Los gobiernos departamentales, distritales y municipales crearán Sistemas Intersectoriales de Garantía de Bienes y Servicios públicos rurales con el fin de articular sus acciones y políticas públicas.**

**Artículo 12.** **Articulación entre políticas rurales y urbanas**. El Gobierno Nacional, los Gobiernos departamentales y municipales coordinarán sus respectivas políticas urbanas con las políticas rurales, dando un enfoque de provisión de bienes y servicios públicos rurales a sus medidas de planeación y ejecución de presupuesto. El Gobierno Nacional reglamentará dentro de los 12 meses siguientes a la sanción de esta Ley, los lineamientos administrativos para crear alianzas urbano-rurales para lograr inversiones eficientes para la provisión de bienes y servicios públicos rurales.

**TITULO VI. MEDIDAS PARA INCENTIVAR EL POBLAMIENTO RURAL.**

**Artículo 13.** Los bienes y servicios públicos rurales podrán ser operados por asociaciones, cooperativas o personas jurídicas sin ánimo de lucro creadas y conformadas por pobladores rurales. Su autorización y operación serán reglamentadas por el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la expedición de esta Ley.

**Artículo 14. Estímulos para incentivar el poblamiento de la zona rural.** El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y en coordinación interministerial e institucional a nivel nacional y territorial, en en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, formulará y ejecutará programas y proyectos que atraigan y retengan a la población en la zona rural. Estas medidas podrán incluir proyectos agrícolas y compra de tierras a través de beneficios crediticios, tales como tasas preferenciales para aquellas personas que estén solicitando créditos para vivienda, tierras o fincas en zonas rurales. De la misma forma, el Gobierno Nacional generará medidas que aumenten la productividad de los pequeños productores agropecuarios, mejorando sus accesos a los mercados y promoviendo cadenas de valor más eficientes que generen empleo y condiciones dignas de vida para la población rural.

**TITULO VII. PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES PARA BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS RURALES**

**Artículo 15.** Modifíquese el artículo 193 de la Ley 2294 de 2023 “ Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” , el cual quedará así:

**ARTÍCULO 193. ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA**. Con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal, y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación del Gobierno Digital, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones, incluido el servicio público de acceso a Internet declarado como servicio público esencial, para lo cual, velará por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones en las entidades territoriales**, dando prioridad a las zonas rurales de cada una de ellas, buscando que la cobertura de la red de internet sea de calidad y llegue a cada rincón del país.**

**(...)**

**Artículo 17.** Modifíquese el artículo 275 de la Ley 2294 de 2023 “ Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” , el cual quedará así:

**ARTÍCULO 275. PROGRAMA AGUA ES VIDA**. El Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio formularán e implementarán, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Programa Agua es Vida en los territorios marginados y excluidos. Este programa **deberá priorizar las zonas rurales y** brindará soluciones de agua potable y saneamiento básico a los sujetos de especial protección constitucional, a la población vulnerable, aplicando enfoques diferenciales y de género, de derechos, territorial e interseccional.

(...)

**Artículo 18.** Adiciónese un parágrafo al artículo 357 de la Ley 2294 de 2023 “ Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” , el cual quedará así:

**ARTÍCULO 357. FONDO DEL BUEN VIVIR**

**PARÁGRAFO. En virtud, de dar cumplimiento a la cuarta línea de acción del Fondo del Buen Vivir consagrada en el presente artículo, se dará prioridad a proyectos que busquen aumentar la cobertura de los servicios públicos en zonas rurales del país, para de esta forma garantizar que este fondo tenga como finalidad mejorar las condiciones de vida en el campo colombiano.**

**TITULO VIII. DISPOSICIONES FINALES.**

**Artículo 19.** Autorízase al Gobierno Nacional para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley, dando cumplimiento al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El Gobierno Nacional podrá financiar la presente iniciativa con recursos provenientes de donaciones de organizaciones nacionales e internacionales, de entidades privadas, de alianzas público-privadas y/o de cooperación internacional.

**Artículo 20. Vigencia.** La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas,

| **ANA CAROLINA ESPITIA**  Senadora de la República |  |
| --- | --- |
| **JUAN DIEGO MUÑOZ CABRERA**  **Representante a la Cámara**  **Partido Alianza Verde** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ JUAN CAMILO LONDOÑO BARRERA** Representante a la Cámara por Antioquia Partido Alianza Verde |
| **JOTA PE HERNÁNDEZ.** Jonathan Pulido Hernández.  **Senador de la República.**  Partido Alianza Verde. | **CAROLINA GIRALDO BOTERO**  Representante a la Cámara por Risaralda  Partido Alianza Verde |
| **JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES** Representante a la Cámara por Boyacá  Partido Alianza Verde |  |

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

1. **OBJETO DEL PROYECTO.**

El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer los lineamientos estratégicos para una política pública rural que garantice la ampliación y cobertura de los bienes y servicios públicos rurales para que los ciudadanos colombianos que residen en el campo vivan en condiciones dignas.

1. **ANTECEDENTES**

A lo largo de la Historia, el Congreso de la República de Colombia ha pretendido incentivar el agro colombiano y mejores condiciones de vida en el contexto rural, no obstante, dentro del ordenamiento jurídico es necesaria una norma que sistematice los lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de bienes servicios públicos rurales. Existen importantes iniciativas legislativas referidas al sector agrícola y que han buscado incentivar la actividad económica del campo y maximizar el potencial de las tierras colombianas. Sin embargo, pese a dichos esfuerzos se hace necesario plantear y formular una Ley que fundamente la Política Pública Integral para la Ruralidad y que tenga en cuenta las necesidades actuales de los colombianos. Por lo tanto, la presente iniciativa busca dejar en claro los lineamientos para que el Gobierno formule y ejecute esta Política.

Se destacan los siguientes normas:

* **Ley 81 de 1988 Por la cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo Económico, se determinan las funciones de sus dependencias, se deroga el Decreto Legislativo No. 0177 del 1º. de febrero de 1956, se dictan normas relativas a los contratos de fabricación y ensamble de vehículos automotores y a la política de precios y se dictan otras disposiciones:**

En esta ley se dan funciones relacionadas con el tema agrícola al Ministerio de Desarrollo Económico. Dentro de las dependencias se establece la dirección general de tecnología industrial, encargada de ejecutar planes y programas que desarrollen la tecnología industrial. Además, establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hace parte del Consejo Nacional de Protección al Consumidor y dl Consejo Nacional de Normas y Calidades, instancias gubernamentales que se encargan de la política de precios de los productos del sector agropecuario (art 61).

* **Ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política:**

La presente ley busca reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

* **Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero:**

Esta ley desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal virtud se fundamenta en los siguientes propósitos que deben ser considerados en la interpretación de sus disposiciones, con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales.

1. Otorgar especial protección a la producción de alimentos.

2. Adecuar el sector agropecuario y pesquero a la internacionalización de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

3. Promover el desarrollo del sistema agroalimentario nacional.

4. Elevar la eficiencia y la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros mediante la creación de condiciones especiales.

5. Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera.

6. Procurar el suministro de un volumen suficiente de recursos crediticios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, bajo condiciones financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, al igual que a los riesgos que gravitan sobre la producción rural.

7. Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización rural y a la protección de los recursos naturales.

8. Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual que la prestación de la asistencia técnica a los pequeños productores, conforme a los procesos de descentralización y participación.

9. Determinar las condiciones de funcionamiento de las cuotas y contribuciones parafiscales para el sector agropecuario y pesquero.

10. Establecer los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros.

11. Propender por la ampliación y fortalecimiento de la política social en el sector rural.

12. Fortalecer el subsidio familiar campesino.

13. Garantizar la estabilidad y claridad de las políticas agropecuarias y pesqueras en una perspectiva de largo plazo.

14. Estimular la participación de los productores agropecuarios y pesqueros, directamente o a través de sus organizaciones representativas, en las decisiones del Estado que los afecten.

* **Ley 139 de 1994 Por la cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones:**

En cumplimiento de los deberes asignados al Estado por los artículos 79º y 80º de la Constitución Política, esta ley crea el Certificado de Incentivo Forestal como un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el conjunto de la población. Su fin es el de promover la realización de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-productor en terrenos de aptitud forestal.

* **Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.**

La Ley regula los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. No obstante, no establece lineamientos claros y contextualizados a las necesidades rurales.

* **Ley 160 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones:**

Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina.

* **Ley 731 de 2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales:**

La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. Tales como beneficios económicos, acceso al régimen de seguridad social, acceso a créditos, educación para el campo y participación de las mujeres rurales en los órganos de decisión.

* **Ley 811 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones:**

Esta ley crea un capítulo nuevo a la ley 101 de 1993. Busca la creación de las organizaciones de cadena. Estas organizaciones podrán ser constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización, acuerdos, como mínimo.

* **Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones:**

La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3D de la presente Ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Especialmente, el artículo 13 estableció el enfoque diferencial para la población campesina víctima del conflicto armado.

* **Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014:**

En esta se consagra el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “Prosperidad para Todos”. Tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la población. En este se consagran los Proyectos especiales agropecuarios o forestales, además se modifica el artículo 83 de la ley 169 de 1994 permitiendo que los terrenos baldíos sean utilizados para aprovechamiento agropecuario y forestal. Sin embargo estos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional.

* **Ley 1561 de 2012 Por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones:**

El objeto de la presente ley es promover el acceso a la propiedad, mediante un proceso especial para otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y para sanear títulos que conlleven la llamada falsa tradición, con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles.

* **Ley 1731 de 2014 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA):**

La presente ley tiene por objeto adoptar medidas, especialmente en materia de financiamiento, tendientes a impulsar la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y fortalecer la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA). Crea el Fondo de Microfinanzas Rurales como un fondo sin personería jurídica, administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), como un patrimonio separado del de su administrador, con el objeto de financiar, apoyar y desarrollar las microfinanzas rurales en el país.

* **Ley 1152 de 2017 “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones”:**

Ley declarada inexequible por la Corte Constitucional de Colombia**.**

* **Ley 1955 de 2019 Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”:**

El artículo 253 establece la obligación del Gobierno Nacional de construir una política pública para la población campesina, a través de la recolección de insumos de diferentes actores.

* **Ley 2294 de 2023 Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2016 “Colombia Potencial Mundial de la Vida**”:

El artículo 358 creó la Comisión Mixta Nacional para articular las políticas públicas relacionadas con la población campesina.

Como podemos evidenciar, pese a que se han realizado varios esfuerzos por generar leyes e iniciativas legislativas relacionadas con el sector agropecuario y el campo colombiano, aún se necesitan generar las medidas propias para incentivar la vida en el campo, para generar las condiciones óptimas dignas y tranquilas que merecen quienes habitan y quienes producen en nuestras tierras rurales. Es por esto, que la presente iniciativa busca dar la noción de lo que significa una vida próspera, digna y feliz en el campo, buscando que se cree una política pública que reconozca el labor de nuestros campesinos e incentive a los ciudadanos a vivir en la ruralidad dando valor a la producción agropecuaria de nuestro país.

1. **FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y CONSTITUCIONALES.**

La presente iniciativa busca dar cumplimiento a los siguientes preceptos jurídicos y constitucionales del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia

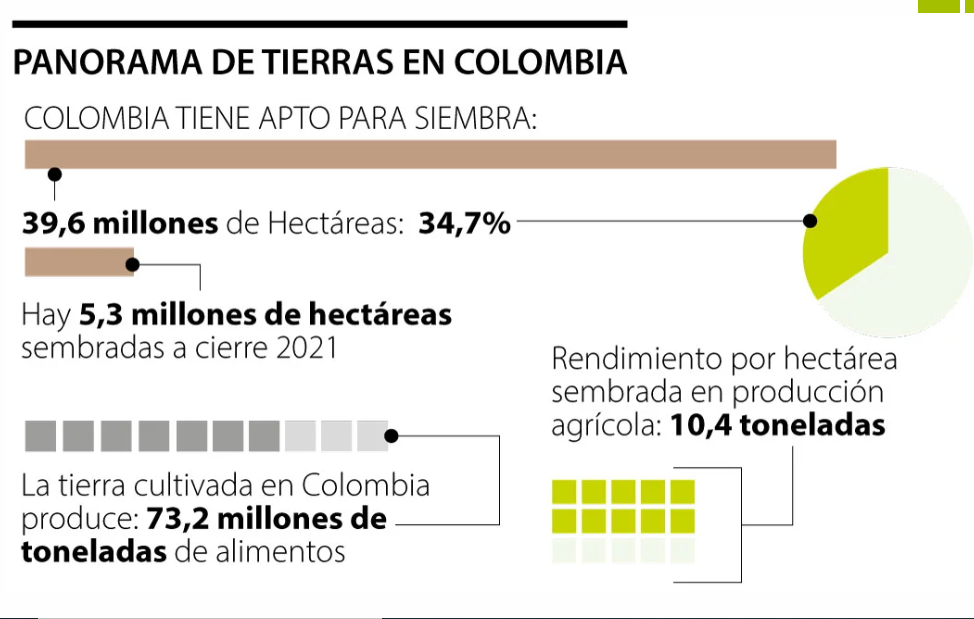
**ARTÍCULO 2o.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Igualmente, este proyecto de ley busca que el Estado cumpla con las obligaciones establecidas en los Artículos 65 a 66 de la Constitución Política de Colombia; especialmente, la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 2023 que reconoce al campesinado como sujeto especial de protección constitucional. Asimismo, es coherente con el Acuerdo de Reforma Rural Integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

1. **JUSTIFICACIÓN**

Colombia es un país con gran riqueza cultural, ambiental y de suelos, por lo que se ha destacado por su gran capacidad agropecuaria. Sin embargo, el 30% del territorio en el país está subutilizado o sobreutilizado (principalmente por la ganadería), mientras que el 70 % se usa, pero no siempre de forma eficiente (IGAC, 2014, Estudio de Vocación de Suelos). Según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Colombia tiene apta para siembra cerca de 39,6 millones de hectáreas de tierra, casi 34% del total.



Fuente: UPRA. Gráfico: tomado de: https://www.agronegocios.co/agricultura/los-duenos-de-tierra-decidiran-si-venden-predios-o-no-al-estado-segun-cecilia-lopez-3422416#

Al panorama de tierras descrito, se suma el maltrato y desconocimiento histórico de los campesinos, que les ha impedido tener oportunidades para aumentar el potencial de sus cultivos y producir para exportar. Así, la población campesina que vive y trabaja en áreas rurales, a menudo, tienen peor acceso y disfrute de bienes y servicios públicos que las personas que viven en el área urbana. Los datos y las investigaciones realizadas por el Departamento Nacional de Estadística Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia (DANE, Mayo 23 de 2022), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2022) “*Revisión OCDE de la Política Rural Colombia, 2022*” y la Comisión Económica para América Latina (2016) “*Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia*” evidencian los déficits, brechas y retos en las coberturas de bienes y servicios en el área rural.

El DANE (2022) indica que la situación de pobreza multidimensional en Colombia en el área rural es del 27,3%. La OCDE (2022) concluye que las áreas rurales registran una pobreza multidimensional 3 veces superior a las áreas urbanas e identifica los siguientes desafíos:

*“(...) i) alta informalidad y concentración en la tenencia de tierra, ii) violencia que aún afecta a las comunidades rurales, iii) una infraestructura de transporte deficiente, con baja calidad de transporte terrestre, férreo o fluvial, iv) un bajo acceso a banda ancha de calidad, y v) brechas en el acceso a servicios de calidad de salud, educación y en algunas regiones de electricidad y agua potable. Además, la falta de información rural (ej., tierras públicas sin títulos o el número de caminos terciarios), junto con la falta de participación de la sociedad civil en la política rural y la débil capacidad de los gobiernos locales representan cuellos de botella relevantes para una implementación efectiva de políticas públicas*(...)”.

La CEPAL (2016) corrobora los siguientes déficits y brechas en los bienes y servicios rurales, por ejemplo:

“(...) *En servicios públicos, las brechas también son mayores que en educación. El déficit relativo entre la zona rural y la urbana, en acueducto, fuente de agua mejorada, alcantarillado, recolección de basuras y energía eléctrica es la mayor de todas (...) En la recolección de basuras y en alcantarillado se desatiende a más de la mitad de la población rural. El servicio de energía eléctrica muestra la mayor brecha entre el campo y las ciudades (50 veces mayor dada la alta cobertura urbana*)(...)”

El Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana también ha aportado un importante banco de datos que demuestra la difícil realidad rural. Esta investigación se nutre de la Encuesta de Calidad de Vida (2020) y se titula: *Caracterización Sociodemográfica del Campesinado Colomiano* (2023). Consultar: [Caracterización del Campesinado](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzE3YmMyZTgtM2M4Mi00MTZlLTg5N2UtNGUzMDkzYmExNTdhIiwidCI6IjE2YWY2YjQ1LTAwYzUtNGJhMy05ZDRjLThiZmExNmU0MzYwMyIsImMiOjR9&pageName=ReportSection).

Las omisiones estatales se suman a las anteriores realidades. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (2022) al realizar la evaluación de la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz (Reforma Rural), explica: “(...) *para la fecha de reporte el 13% de las disposiciones del Punto 1 no había iniciado su implementación, el 66% se encontraba en estado mínimo, el 17% en estado intermedio y el 4% estaba en estado completo(...)”.* ( Informe “Seis años de implementación del Acuerdo Final: retos y oportunidades en el nuevo ciclo político”)*.*

Es por esto y con base en las investigaciones expuestas anteriormente, que se hace necesaria una ley que indique los lineamientos de Política Pública Rural en Colombia, que brinde oportunidades a los habitantes de la ruralidad, que potencialice el talento de los agricultores colombianos, que mejore las condiciones de vida en el campo para que de esta forma se queden a trabajar y vivan dignamente. Es por esto, que nace esta iniciativa legislativa, con el propósito de generar oportunidades y condiciones dignas para nuestros campesinos. Por lo tanto y a manera de conclusión, se puede decir que al volverse ley la presente iniciativa, estaríamos siendo coherentes con el enfoque del gobierno actual, estaríamos buscando un cambio real e iríamos en concordancia con las recomendaciones de los expertos, de buscar una economía que se sustente en la garantía de bienes y servicios públicos rurales.

1. **IMPACTO FISCAL.**

El impacto fiscal que se genere con esta normatividad, deberá ser cubierto por el gobierno nacional en cumplimiento del marco del marco fiscal a mediano plazo. Además, del presupuesto general de la nación, podrá acudir a cooperación internacional y diferentes fuentes de financiación para garantizar el ingreso con el cual las personas de la tercera edad del país puedan contar con condiciones de vida digna.

1. **RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.**

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, atentamente nos disponemos a señalar algunos criterios guías en los que se podría configurar conflictos de intereses, para que los congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran inmersos en alguna de estas causales, sin embargo, pueden existir otras causales en las que se pueda encontrar cada congresista, las cuales deberán ser determinadas para cada caso en particular por su titular, siendo estos criterios meramente informativos y que deben ser analizados teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019.

Entre las situaciones que señala el artículo 1o antes mencionado, se encuentran:

***A)Beneficio Particular:*** *aquel que* otorga en *privilegio o* genera *ganancias* o *crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*

***b) Beneficio actual:*** *aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

***c) Beneficio directo****: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.".*

Por lo anterior, las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés, serían aquellos que tengan un beneficio particular, actual y directo en materias relacionadas con la población rural, productores agropecuarios y/o campesinos.

En esa medida, pongo a consideración del Congreso de la República para iniciar el trámite correspondiente, al cumplir con las exigencias dictadas por la Constitución y la Ley.

**Cordialmente,**

| **ANA CAROLINA ESPITIA**  Senadora de la República |  |
| --- | --- |
| **JUAN DIEGO MUÑOZ CABRERA**  **Representante a la Cámara**  **Partido Alianza Verde** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ JUAN CAMILO LONDOÑO BARRERA** Representante a la Cámara por Antioquia Partido Alianza Verde |
| **JOTA PE HERNÁNDEZ.** Jonathan Pulido Hernández.  **Senador de la República.**  Partido Alianza Verde. | **CAROLINA GIRALDO BOTERO**  Representante a la Cámara por Risaralda  Partido Alianza Verde |
| **JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES** Representante a la Cámara por Boyacá  Partido Alianza Verde |  |